

C.A. de Santiago

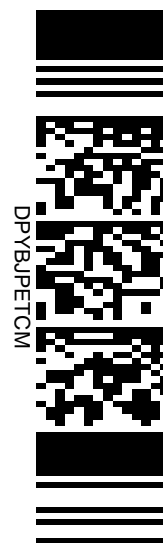
Santiago, ocho de junio de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Que con 15 de diciembre del 2020, recurre de protección constitucional Romanet Gutiérrez Pinochet, chilena, abogada, cédula nacional de identidad N° 12.228.692-4, en representación convencional de **Patricia Fidelina del Carmen Venegas Román**, chilena, soltera, RUN 6.319.567-7, domiciliada para estos efectos en Avenida Libertad 919, oficina 82, comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso, según mandato judicial que acompaña, en contra del **Servicio de Registro Civil e Identificación, oficina de Ñuñoa**, por el acto arbitrario e ilegal en que ha incurrido al denegar la solicitud de posesión efectiva de **María Margarita Román Román**, provocando con ello una privación, perturbación y amenaza a su legítimo ejercicio de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a los hechos, funda su recurso en que, tras el fallecimiento de **María Margarita Román Román**, tía materna de la recurrente, ocurrido el día 16 de junio del 2008, con fecha 16 de diciembre de 2011, su representada concurrió a las dependencias del Servicio de Registro Civil e Identificación de Ñuñoa, con la finalidad de solicitar la tramitación de la posesión efectiva de la herencia quedada al fallecimiento de su tía, solicitud a la que se le asignó el N°1016-2011.

La oficina del Registro Civil e Identificación de Ñuñoa, mediante la resolución exenta N°4417, firmada por el Director Regional de Ñuñoa, **rechazó** dicha solicitud de posesión efectiva de la herencia quedada al fallecimiento de María Margarita Román Román, siendo notificada de este rechazo el día 16 de noviembre del 2020. El Servicio de Registro Civil fundó su rechazo en la siguiente causal: "1.- La solicitante no ha acreditado su calidad de heredera respecto de la causante. 2.- Se rechaza la solicitud por cuanto la información sumaria de testigos, no es un medio de prueba para acreditar la filiación de Rosa Sara Román, madre de la solicitante con la causante. Según los antecedentes de que dispone la recurrente, María Margarita Román Román, causante, posee filiación indeterminada. Al momento de nacer, y de acuerdo con la ley vigente en dicha época, la filiación que se poseía respecto de los padres podía ser legítima o ilegítima, y de esta última, natural o simplemente ilegítima. En este caso en la partida de nacimiento de la causante no consta ninguna legitimación, por lo tanto, queda descartada la filiación legítima. Por su parte, el artículo 271 del Código Civil, vigente a la fecha de nacimiento del causante, esto es el 25 de abril de 1931 establecía que el hijo natural era aquel que poseía reconocimiento de ambos padres o al menos por uno de ellos mediante escritura pública, acta



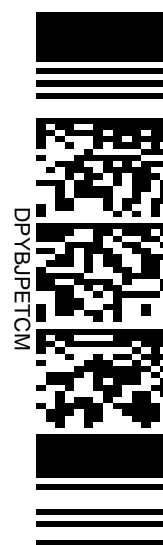
extendida ante el Oficial del Registro Civil o testamento, instrumento que se subinscribía al margen de la respectiva partida de nacimiento. Recién en ese momento se establecía el estado civil de hijo natural. No consta en la partida de nacimiento subinscripción de reconocimiento materno. Por tanto, en derecho, la filiación allí es simplemente ilegítima respecto de la madre, la misma que no otorga derechos hereditarios. Hace presente que el 02 de junio de 1952 entró en vigor la ley N°10.271, que modificó los requisitos para reconocer a los hijos naturales. Se estableció un plazo para ejercer las acciones de filiación para las personas nacidas antes de esa fecha que carecieran de reconocimiento de hijo natural, acción de cuyo ejercicio no consta en este caso”. Expone que la causante no tuvo descendientes, ni cónyuge, y los ascendientes fallecieron antes de la apertura de la sucesión, por lo que es su hermana, la llamada a suceder, y en representación de ésta la solicitante, en atención a lo dispuesto en los artículos 984, 985, 986 y 990 del Código Civil.

En cuanto al derecho, afirma que de los hechos anteriormente expuestos se verifica que el marco legal aplicable, en principio, a la filiación de María Margarita Román Román es el relativo al artículo 271 del Código Civil vigente a la fecha de nacimiento de la causante, que entiende por hijo natural a aquel que poseía reconocimiento de uno o ambos padres, ya sea por escritura pública, acta extendida ante el Oficial del Registro Civil o a través de un testamento, todos estos, subinscritos al margen de la respectiva partida de nacimiento, situación que no consta en autos. Aduce que el artículo transitorio número 6 de la ley N°10.271 de 1952 que introduce modificaciones esenciales sobre filiación, prevé una regla respecto de todos aquellos cuyos padres solamente hubiesen dejado constancia de su nombre en la inscripción de nacimiento, señalando el legislador, que no por dicho acto se adquiere la calidad de hijo natural. No obstante, lo anterior, en el mismo artículo se prevé la posibilidad de obtener dicha calidad jurídica dentro del plazo de dos años debiendo deducir la acción de reconocimiento de la filiación natural, situación que tampoco se verifica en autos. Por otro lado, es relevante señalar que el artículo transitorio implica una contradictoriedad con el resto del texto de la norma, en cuanto priva de efectos jurídicos el reconocimiento que puedan realizar los padres a partir de la partida de nacimiento, salvo que cumplan con los supuestos del artículo 271. Esta idea es contradictoria con lo dispuesto en la propia ley en cuanto es la propia ley 10.271 que autorizó el reconocimiento voluntario efectuada en acta de nacimiento, en cuanto queda plasmada en forma indubitada la constancia de la voluntad seria y libre de reconocer al hijo como propio, constando para estos efectos como un documento público entre vivos, de acuerdo con la definición del artículo 1699 del



Código Civil. En este mismo sentido, expone, la Corte Suprema se ha pronunciado señalado que resulta contrario a derecho dar primacía a una norma transitoria dictada en una época pretérita y rechazar la eficacia del reconocimiento de un hijo que no se sujeta estrictamente al cumplimiento de todas las formalidades exigidas en la ley vigente en su momento (Sentencias Rol 7032-2007 y 6160-2012). Por tanto, se debe huir del exceso de formalismo cuando dicha forma deja de ser un medio para proteger derechos legítimos y pasa a convertirse en un fin en sí mismo. Así, la omisión de formalidades es subsanable por otros actos inequívocos de clara intencionalidad de reconocimiento del hijo, más aún si dichos actos la legislación posterior los considera formas válidas de reconocimiento, deviniendo la observancia de la formalidad anterior innecesaria. Invoca igualmente lo previsto en el artículo 33 del Código Civil, y lo previsto en el artículo 188 del mismo cuerpo legal. Como consecuencia de lo anterior, dice, la filiación de la causante doña María Margarita Román Román se encuentra determinada conforme a la ley, con respecto a su madre, abuela de mi representada, doña Patricia Fidelina Del Carmen Venegas Román, por lo que su representada tiene la calidad de heredera de la causante, atendido que es hija de su hermana materna. Así las cosas, la negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación en conceder a su representada la posesión efectiva en la herencia de la causante, quién es su tía materna, se funda en una serie de disquisiciones sobre normas derogadas, que regulaban esta materia con antelación a la Ley N° 19.585. En efecto, el reconocimiento que se realiza al consignar el nombre del padre o de la madre, a petición de cualquiera de ellos, al momento de practicarse la inscripción del nacimiento, fue establecido por primera vez por la Ley N° 4.808 sobre Registro Civil en su artículo 32, para los efectos de permitirle al hijo ilegítimo demandar alimentos. Después fue trasladado al artículo 280 del Código Civil, y finalmente la Ley N° 10.271, de 2 de abril de 1952, le dio el efecto de otorgar al hijo el carácter de natural y hoy con la Ley de Filiación, simplemente de hijo.

Hace presente que la Ley N° 19.585 eliminó las diferencias entre las distintas categorías de hijos que existían hasta antes de su dictación, esto es, hijos legítimos, hijos naturales e hijos ilegítimos, por lo que el criterio del Servicio de Registro Civil e Identificación, pugna tanto con la letra de la ley vigente en materia de filiación como con su espíritu, que persiguió terminar con las diversas categorías de hijos y, con ello, las discriminaciones a que daban lugar. En la especie, resulta aplicable el artículo 188 del Código Civil, que determina la filiación no matrimonial de la madre de la causante, en base a la cual su representada, en su calidad de hija de la hermana materna de la causante, ha



reclamado el reconocimiento de sus derechos sucesorios, y si bien puede ser válido discernir que antes de la Ley N°10.271, y después de ésta de acuerdo a sus normas transitorias, debía efectuarse el reconocimiento de hijo natural por escritura pública, de igual modo debe razonarse que con la dictación de la Ley N° 19.585, en el caso de marras, la situación jurídica respecto de la causante y los causahabientes está regulada únicamente por el artículo 188 citado.

Agrega que la filiación de doña María Margarita Román Román respecto de su madre Nazaria Román, se determinó por el reconocimiento voluntario presunto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 188 del citado Código de parte de la última, al pedir ésta que se consignara su nombre al momento de practicarse la inscripción del nacimiento. En consecuencia, al estar determinada la filiación de la causante, su representada, quién es hija de su hermana materna, tiene derecho para solicitar la posesión efectiva de doña María Margarita Román Román, ante el Servicio de Registro Civil e Identificación.

Hace presente que con todo lo expuesto, queda de manifiesto que la acción de la recurrida es ilegal y arbitraria, puesto que, junto con desconocer la filiación de la madre de la causante, desestima también los derechos que la normativa vigente le otorga a mi representada, al denegar la posesión efectiva por ella solicitada, en su calidad de hija de la hermana materna de la causante, lo que se traduce en una discriminación arbitraria que excede de las diferencias contempladas en la ley y, por consiguiente, en una afectación de la garantía contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley respecto de la recurrente, en relación con aquellas personas a quienes se les ha aceptado la solicitud de posesión efectiva, cumpliendo los mismos requisitos, debiendo en consecuencia ser acogida la presente acción de protección.

Solicita que esta Corte reestablezca el imperio del derecho en el sentido de dejar sin efecto la Resolución Exenta N°4417, notificada con fecha 16 de noviembre de 2020, que rechazó la solicitud de posesión efectiva N°1016 presentada por doña Patricia Fidelina Del Carmen Venegas Román respecto de la herencia quedada al fallecimiento de doña María Margarita Román Román, tía materna de mi representada; y en consecuencia de lo anterior, se ordene al recurrido conceder dicha solicitud de posesión efectiva, con costas.

Por su parte, el recurrido, **Servicio de Registro Civil e Identificación**, con fecha 22 de febrero del año en curso, informa sobre el presente recurso, señalando que con esta acción se pretende impugnar por ilegal y arbitraria la resolución exenta N° 4417 de fecha 14 de febrero del año 2012, que rechazó la



solicitud de rectificación de posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de María Margarita Román Román, RUN 1095839-3.

Que, Revisado el Sistema Automatizado de Posesiones efectivas, este registra tres solicitudes respecto de los bienes quedados al fallecimiento de la causante ya individualizada:

- a) Solicitud 805, de 12 de diciembre del 2008, en la Oficina de Ñuñoa, la que fuera rechazada por resolución exenta 37.315 de 29 de diciembre del 2008, emitida por el Director Regional Metropolitano, por causa de que la solicitante debe tener existencia legal al momento de solicitar la posesión efectiva.
- b) B) Solicitud 455, de 29 de mayo del 2009, en la misma oficina, la que fuera igualmente rechazada por resolución exenta 34836 de 4 de diciembre del 2009, por no haber acreditado la solicitante su calidad de heredera
- c) Solicitud 1016, de 16 de diciembre del 2011, la que fuera rechazada por resolución exenta N°4417 de 14 de febrero del 2012, señalando que la solicitante no ha acreditado su calidad de heredera respecto del causante.

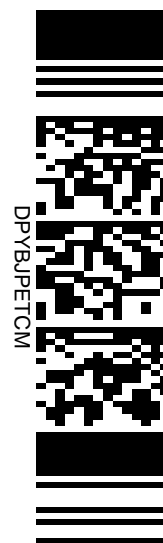
Invoca su calidad de heredera de la causante, alegando ser sobrina de esta, ya que sería hija de Rosa Sara Román, RUN 2284066-, presunta hermana de la causante.

Agrega que consta en la inscripción de nacimiento de María **Margarita Román Román**, del año 1921, en el rubro nombre del padre se consigna “no declarado” y en el rubro nombre de la madre, se consigna el de Nazaria Moran, siendo la madre la requirente de la inscripción. En el año 1970 se generó una nueva inscripción de nacimiento de la causante, correspondiente al número 76 Registro R, circunscripción Recoleta.

Misma situación con **Rosa Sara Román Román**, madre de la recurrente. Su inscripción de nacimiento es del año 1923 y tiene como padre “no declarado” y en el rubro nombre de la madre, se consigna el de Nazaria Román.

Concluye que de esa forma se logró determinar que las hermanas, no tienen reconocimiento como hijas naturales, conforme a la ley vigente a la época de inscripción de sus nacimientos, por lo que carecen de ascendientes, hermanos o colaterales con derecho a suceder, ya que la madre solo pidió que constara su nombre.

Expone que en cuanto al derecho, antes de la entrada en vigencia de la ley 10.271 de 2 de junio de 1952, el código Civil establecía que el reconocimiento de hijos naturales debía efectuarse al momento de inscribir el nacimiento, o bien, en



un acto posterior, mediante manifestaciones expresas de voluntad, contenidas en una escritura pública o en un acto testamentario, documentos que debían quedar debidamente subinscritos al margen de la inscripción de nacimiento, requiriéndose, además, que dicho reconocimiento fuere aceptado por el inscrito o su curador, si este fuere menor de edad, debiendo igualmente subinscribirse la escritura pública de aceptación.

Continúa explicando que el artículo sexto transitorio de la ley 10.271 regulo expresamente la situación de las personas inscritas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley y que no habían sido objeto de reconocimiento, otorgando derecho a su titular para interponer la acción de reconocimiento forzado en el plazo de dos años, contados desde la entrada en vigor de la nueva ley, es decir, desde el 2 de junio de 1952. De acuerdo con dicha norma, la tía materna y la madre de la recurrente, que se encontraban en esa situación, debieron haber ejercido dicha acción para que sus filiaciones maternas quedaran determinadas conforme a la normativa entonces vigente, lo que no hicieron.

Expone que, por otra parte, en cuanto a la aplicación del estatuto jurídico mas beneficioso que propone la ley 19.585, esta ley no señala que podrá regir situaciones ocurridas con anterioridad a su dictación.

Invoca el artículo 2 y 3 de la ley sobre efecto retroactivo de las leyes, señalando que solo debe concluirse de ellos que la constitución de un estado civil o la forma de obtener una calidad debe regirse por la ley vigente a la época en que se va a constituir o establecer y que, una vez constituido o adquirida la calidad, esta no se pierde por el cambio de los requisitos para su establecimiento. No obstante, ello, los derechos y obligaciones que derivan de la calidad deben regirse por la ley vigente.

De ello se desprende que la causante y su hermana, madre de la recurrente no han adquirido la filiación en relación con quien se señala como su madre en el rubro correspondiente de sus inscripciones de nacimiento.

Agrega que la ley 19.903 que da competencia al Servicio para conocer y resolver las solicitudes de posesiones efectivas de herencias intestadas abiertas en Chile, en su artículo 6 señala que la posesión efectiva será otorgada a todos los que posean la calidad de herederos, de conformidad a los registros del Servicio recurrido, en el mismo sentido se establece en el Reglamento de la ley.

Aduce que, en virtud de todo lo anterior, al momento de rechazar la solicitud el Director Regional de(S) de la Región Metropolitana, al rechazar la posesión efectiva solicitada por la recurrente, no incurre en ningún acto ilegal o arbitrario, por cuanto no se cumplían los requisitos legales para acoger la solicitud.



Afirma que tampoco el recurrido ha afectado el derecho a la igualdad ante la ley, ya que no incurre en ningún acto de discriminación al aplicar las normas vigentes, haciendo presente que las normas jurídicas son iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y diversas para aquellos que se encuentren en situaciones diferentes. Invoca un dictamen de Contraloría General de la República número 59488 del 2011 en el mismo sentido.

Por último, hace presente que la materia objeto de el recurso es la filiación de doña Rosa Sara Román Román y la recurrente Patricia Venegas Román con la causante, María Margarita Román Román. Por lo mismo, no corresponde que sea resuelta por la presente vía cautelar, por cuanto esta no constituye una instancia declarativa de derechos, sino de protección de aquellos que, siendo indubitados, se encuentren afectados por alguna acción ilegal o arbitraria, presupuestos que en este caso no concurren, por cuanto la recurrente no cuenta con un derecho indubitado, sino que a través de esta acción constitucional busca declarar el reconocimiento de su filiación con la causante María Margarita Román Román.

Invoca la causa ingreso de esta Corte N°66.287-2018, que falló un recurso de protección en el sentido que el recurrido alega.

Y CONSIDERANDO:

1°. Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley– o arbitrario –producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él– y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

2°. Que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte ha sido la negativa del Servicio de Registro Civil en cursar la posesión efectiva pedida por la recurrente, reprochando que la tía materna de la protegida no tiene la calidad de hija respecto de la abuela de la recurrente, haciendo ver que solo tiene la calidad de hija ilegítima, lo que se estima atentatorio de la garantía que protege la igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 N° 2 de la carta política.

3°. Que el artículo 33 del Código Civil dispone que tiene el estado civil de hijo respecto de una persona aquel cuya filiación se encuentra determinada de conformidad a las reglas previstas por el Título VII del Libro I de ese Código. A su vez, el párrafo 4 de ese Título, que regula la determinación de la filiación no



matrimonial, en el artículo 188 prescribe que el hecho de consignarse el nombre del padre o de la madre, a petición de cualquiera de ellos, al momento de practicarse la inscripción del nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación.

4°. Que la negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación a conceder a la interesada la posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de la causante, su tía materna, se fundó en no tener acreditada esta última la calidad de hija, respecto de la abuela de la recurrente, Nazaria Román, por lo que hace aplicable en la materia el artículo 6 transitorio de la Ley N° 10.271, de 2 de junio de 1952, y la normativa previa contenida en el Código Civil, que establecía que el reconocimiento de los hijos no matrimoniales se debía realizar al momento de inscribir el nacimiento o en un acto posterior, debiendo dejarse expresa constancia al margen de la inscripción de nacimiento, lo que debía ser aceptado por el inscrito o su curador, inscribiéndose también al margen la aceptación.

5°. Que tal acto, esto es denegar la filiación de la causante, tía materna de la recurrente, constituye pues un estricto y formal apego a normas ya derogadas, desconociendo las reglas que ahora regulan la materia, los principios que las inspiran y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Si bien la legislación anterior otorgó efectos restringidos a tal reconocimiento, en la actualmente vigente tal manifestación de voluntad simplemente otorga la calidad de hijo, sin distinción alguna.

6°.—Que es necesario considerar que la Ley N° 19.585 eliminó las diferencias entre las distintas categorías de hijos que existían hasta antes de su dictación, esto es, “legítimo”, “natural” e “ilegítimo”, por lo que pretender que, en definitiva, por no haber sido reconocida la causante en forma expresa por su madre, abuela de la recurrente, en una escritura pública, la causante no tendría filiación materna determinada, es un criterio que se aparta incluso de la letra de la ley vigente en materia de filiación como de su espíritu, que persiguió terminar con las diversas categorías de hijos y, con ello, las discriminaciones a que daba lugar.

7°. Que, en el caso de marras, resulta aplicable el artículo 188 del Código Civil y, en consecuencia, ha de concluirse que la filiación de la causante María Margarita Román Román está determinada en relación con su madre, por haber operado al tiempo de la inscripción de nacimiento el denominado “reconocimiento espontáneo”, que consagra actualmente la norma recién señalada.

8°. Que de lo expuesto y concluido en los motivos anteriores resulta evidente que procede acoger la acción cautelar intentada, por cuanto el actuar del Servicio de Registro Civil e Identificación es ilegal, desde que desconoce la filiación determinada de la tía materna de la recurrente, y respecto de quien esta



solicitó la posesión efectiva a la institución recurrida, dejando de aplicar la normativa legal vigente para el reconocimiento de sus derechos, lo que se traduce en una discriminación que va más allá de las diferencias que contempla la ley y, por consiguiente, afecta la garantía contemplada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley respecto del recurrente en relación a aquellas personas a quienes se les ha aceptado la solicitud de posesión efectiva, cumpliendo los mismos requisitos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se **ACOGUE** el recurso de protección interpuesto en favor de **Patricia Fidelina del Carmen Venegas Román** en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 4417, de 14 de febrero del 2012, debiendo el Servicio de Registro Civil e Identificación proceder a dictar la resolución que en derecho corresponda respecto de la solicitud de posesión efectiva formulada, considerando que la tía materna de la recurrente, María Margarita Román Román, es hija de Názara Román, la que a la vez es madre de Rosa Sara Román Román, madre de la recurrente, sin costas.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad archívese.

Redacción de la Ministra (S) señora Rodríguez

N°Protección-96986-2020.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por la Ministra (S) señora Irene Rodríguez Chávez y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández. No firma la Ministra (S) señora Rodríguez por haber terminado su suplencia.



Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, ocho de junio de dos mil veintiuno.

En Santiago, a ocho de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

